

Juicio de Faltas nº [REDACTED]/2013

**JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO ONCE
MADRID**

SENTENCIA

En Madrid, a seis de marzo de dos mil catorce.

El Ilmo. Sr. D. Juan Javier Pérez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número ONCE de esta capital, ha visto el presente Juicio de Faltas de referencia, seguido por una posible falta contra el ORDEN PÚBLICO, apareciendo como denunciante los Policias Municipales nºs [REDACTED] y como denunciada [REDACTED], cuyas circunstancias personales constan suficientemente en las actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha de cinco de marzo de dos mil trece ha tenido lugar en este Juzgado la vista oral y pública del Juicio de Faltas antes citado, constando documentadas en la grabación del juicio oral las declaraciones prestadas en el mismo y las alegaciones y pretensiones efectuadas por las partes.

SEGUNDO: La presente resolución ha sido dictada por el Magistrado-Juez Titular, a propuesta del Juez en prácticas D. Guillermo Solar Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Reglamento 2/2000 de Jueces Adjuntos, de 25 de octubre, del Consejo General del Poder Judicial.

HECHOS PROBADOS

Se declara probado que sobre las 09.20 horas del día nueve de octubre de dos mil trece, en la calle Benamargosa 4, de Madrid, la denunciada, [REDACTED]

██████████, les dijo varias veces a los Policías Municipales n°s ██████████ que 'no sabían de leyes', llegando a manifestar en presencia de ellos que 'eran como unos matones', tras observar cómo los agentes solicitaban la documentación a un cámara que se encontraba allí, que grababa a los agentes en contra de las indicaciones de éstos, y ver cómo el agente n° ██████████ apartaba bruscamente la cámara con que se grababa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Esta sentencia debe partir de la premisa de que, por hallarnos en un proceso penal, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 CE, ampara al denunciado, recayendo sobre la denunciante la carga de probar penalmente la responsabilidad subjetiva del denunciado. Consecuentemente, en caso de no acreditarse la culpa del denunciado con tal certeza que enerve la presunción de inocencia, o caso de subsistir dudas al respecto, la citada presunción de inocencia, conjugada con el principio *in dubio pro reo*, debe conllevar el dictado de sentencia absolutoria. Además, atendido el principio de libre valoración de la prueba, reconocido en el artículo 741 LECrim, es oportuno pronunciarse sobre el valor de las pruebas obrantes en las actuaciones y practicadas en la vista del juicio, debiendo dictar una resolución judicial motivada, tal y como exige el artículo 120.3 CE. En suma, el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 CE, dice la STS 5373/2011, de 22 julio, que implica que '*...toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)*'; y además, como recordó la STS 3962/2010 de 27 julio, '*...supone que se haya desarrollado, bajo la iniciativa de la acusación, una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio sea suficiente para desvirtuar racionalmente aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad.*'

La acusación particular, solicitó condena por la falta tipificada en el artículo 634 del Código Penal, ubicada en el

titulo de las faltas contra el orden público, precepto que castiga con multa de diez a sesenta días la falta de respeto o consideración a la autoridad o sus agentes, o la desobediencia leve a los mismos.

A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que la declaración testifical en el juicio oral de los agentes policiales que hubieran tenido intervención profesional en los hechos, puede constituir prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, de no constar móviles espurios que permitan dudar de su veracidad (así, sentencias de 18-6-90 y 10-12-91, entre otras), en este caso se ha practicado prueba, propuesta por la defensa, consistente en reproducción de vídeo en el que se grabaron hechos que son objeto del presente enjuiciamiento, prueba concluyente y sólida que explica la absolución de la denunciada. En el vídeo se observa como el agente de Policía Municipal [REDACTED], con la cobertura del agente [REDACTED], advierten al cámara para que si publica el vídeo salga su imagen pixelada, manifestando luego que esperaban que no estuviese grabando, momento después en que, tras ver que continúa grabando, el agente [REDACTED] golpea la cámara, requiriéndoles seguidamente los dos agentes para que se identifique; en el mismo lugar, se hallaba la denunciada, quien se encontraba utilizando su móvil, quien afirmaba que no sabían de leyes, manifestando en última instancia que eran como unos matones.

Como recuerda la SAP Madrid de 5 febrero 2009, '...la estructura típica de todos los delitos contra la autoridad, en atención al bien jurídico por ellos protegido, supone que la actuación de quien ejerce la autoridad, no solo sea dentro de sus funciones propias, sino que además sean legítimas, conformes a derecho, pues de no ser así, estaríamos ante una extralimitación por parte de la autoridad que no pueden ser amparadas'; en este sentido, puede citarse la STS de 18 de abril de 1988 que dice: "... desde antiguo la jurisprudencia de esta Sala viene sosteniendo que en el delito de resistencia a la Autoridad, ésta o el agente de la misma ha de actuar de acuerdo con las normas vigentes (Tribunal Supremo 26-1-68). Asimismo, ha decidido esta Sala recientemente (SS. 25-2-88, Rec. núm. 1854/85) que la resistencia requerirá una obstaculización activa de la acción legítima de la autoridad". Ello tiene como consecuencia que el afectado por una acción de la autoridad, que no se ajusta a las exigencias impuestas para este acto por el ordenamiento jurídico, puede ejercer -si se dan los requisitos que lo autorizan- un derecho de defensa de los bienes jurídicos que resultan afectados por dicha acción. Por lo tanto, en los casos en los que se alegue la falta de adecuación a derecho de la acción de la autoridad los Tribunales deben verificar si se dan las condiciones del derecho de defensa que otorga el orden jurídico al afectado

por tales acciones, verificación que ha sido por completo omitida en la sentencia recurrida, a pesar de haber sido planteada por la Defensa en sus conclusiones provisionales, elevadas luego, en el juicio oral, a definitivas'. En el mismo sentido, la STS de 15 de octubre de 1990 dispone que '...para que las autoridades, sus agentes o los funcionarios públicos, puedan gozar de esa especial protección, inherente a su condición pública, es indispensable que no se extralimiten gravemente en el ejercicio de su funciones; que se ajusten, en ese desempeño, a las normas legales reguladoras de la actividad de que se trate, que procedan con tacto, prudencia y discreción, que no recurran al empleo de palabras soeces e inciviles, y que su actuación, exenta de toda violencia y de toda brutalidad, se singularice por la mesura, el comedimiento, y la ausencia de excesos o abusos, que deben caracterizar el ejercicio de las funciones públicas, de tal modo que si, las Autoridades, sus agentes, o los funcionarios públicos, no se ajustan, en su actuación, a lo dispuesto en las leyes, si se extralimitan o proceden de modo abusivo, bastardeando el ejercicio de sus funciones, con violencias, malos modales, o empleo de palabras soeces, ello determinará, irremisiblemente que, tales sujetos, queden desasistidos de la especial protección de la que, de ordinario, gozan, experimentando una degradación a la condición de particulares, debiendo calificarse el comportamiento de los administrados que les repliquen con violencia verbal o con vías de hecho, del modo ordinario y general, sin que sean juzgados como reos de delitos de atentado... infracción que se desvanece y diluye, como ya se ha dicho, cuando el ejercicio de sus funciones públicas se impregna de excesos, abusos, extramilitaciones, ilegalidades, violencias innecesarias o actitud altanera y despectiva a los administrados, a los que se veja y escarnece...'.

En suma, como también afirma la citada SAP Madrid de 5 febrero 2009, '...cuando exista en los agentes de la autoridad una conducta irregular consistente en una notoria extralimitación al insultar, provocar y dirigirse con actitud amenazadora contra las personas a las que pretenden imponer un mandato o cuando emplean coacciones o malos tratos no determinantes de un propio estado de defensa (S.T.S. de 24 de junio de 1994, 13 de noviembre de 1992 ó 26 de enero de 1996), se produce una extralimitación, cuya consecuencia es la privación de la especial protección del Agente que le convierte en un mero particular'. Es decir, el exceso en la función, les hace salirse fuera de la esfera de protección del bien jurídico protegido, que no es otro que la función pública, pues lo que se protege no es al agente en sí, sino el ejercicio de la función pública y los fines a los que ésta sirve por medio de la actuación de los agentes.

En el presente caso se observa en el vídeo como los agentes llevaron a cabo una actuación que carecía de cobertura legal, pues ni existe prohibición de filmar en el espacio público, ni la imagen de los agentes; así, cabe hacer referencia a la STC 72/2007 de 16 de abril, que en un caso similar al aquí cuestionado, y ponderando los derechos a comunicar y recibir libremente información veraz, y a la propia imagen, afirma que '...el derecho a la propia imagen no es absoluto o incondicionado, de suerte que existen circunstancias que pueden determinar que la regla general conforme a la cual es al titular de este derecho a quien, en principio, corresponde decidir si permite o no la captación y difusión de su imagen por un tercero, ceda a favor de otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos, lo que ocurrirá en los casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen; añadiendo asimismo que '...estamos ante un documento que reproduce la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público -la propia demandante de amparo admite expresamente que por su condición de Sargento de la Policía Municipal de Madrid desempeña un cargo público- y que la fotografía en cuestión fue captada con motivo de un acto público (un desalojo por orden judicial, que para ser llevado a cabo precisó del auxilio de los agentes de la Policía Municipal, ante la resistencia violenta de los afectados), en un lugar público (una calle de un barrio madrileño), por lo que en modo alguno resulta irrazonable concluir, como se razona en la Sentencia impugnada, que concurre el supuesto previsto en el art. 8.2.a) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen'.

Además, la actuación del agente al apartar bruscamente la cámara, como gesto de desaprobación por el rechazo a la filmación de su imagen, supone un exceso en su comportamiento, abandonando las pautas de tacto, moderación y templanza que, a salvo de situaciones graves, se exigen y deben estar implícitas en el modo de desempeño de su función.

Como resultado, y al estar desprovista la actuación del agente de la cobertura que le daría de haberse realizado en el ejercicio de la función pública, el comportamiento de la denunciada, a través de las expresiones vertidas, se puede enmarcar en un gesto de desaprobación o rechazo ante lo que consideró, y así se ha valorado, como un exceso en la actuación policial; y ello sin perjuicio de que el contenido de las expresiones vertidas, una vez despojados los agentes de la esfera de protección que les confiere la función pública, y estando en un ámbito privado, aunque pueden ser conceptuadas

objetivamente como injuriosas, no es menos cierto que se han vertido en un ámbito circunstancial consecuencia de la situación de tensión vivida, y siendo que solo se ha probado que la denunciada haya vertido en una ocasión la expresión 'son como unos matones' en alrededor de cinco minutos de conversación grabada.

En suma, no cumplidos los requisitos que el tipo penal enjuiciado exige para su apreciación, e insistiendo en que la conducta enjuiciada se ha valorado atendiendo el carácter de mero particular que ostentan los agentes, toda vez que su actuación queda fuera de los márgenes de la función pública.

TERCERO: Conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas procesales serán declaradas de oficio.

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación. En nombre de S.M. el Rey, en virtud del poder que emanado del Pueblo, la Constitución me otorga.

FALLO

Que debo absolver y ABSUELVO a [REDACTED]
[REDACTED] de la falta por la que ha sido enjuiciada.

Las costas procesales se declaran de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de APELACIÓN para ante la Il. Audiencia Provincial. La presente es apelable en el plazo de los CINCO días siguientes al de su notificación. Durante éste periodo se hallaran las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.